

Venezuela renace: reconstrucción, legitimidad y el futuro del poder

Antonio De La Cruz
Director Ejecutivo
7/Jul/2026

Cómo la estrategia de reconstrucción de Delcy Rodríguez busca restaurar la autoridad política tras el mayor desastre de la Venezuela contemporánea.

En la historia de las catástrofes nacionales, la reconstrucción rara vez consiste únicamente en levantar edificios. También implica reconstruir autoridad. Los terremotos destruyen carreteras, hospitales y viviendas, pero igualmente erosionan algo mucho más difícil de reparar: la confianza en quienes gobiernan. La Venezuela posterior al devastador doble sismo de junio 2026 ilustra este principio con extraordinaria claridad.

La serie de anuncios realizados por la interina, Delcy Rodríguez, tras la emergencia —subsidios directos, créditos hipotecarios, exoneraciones tributarias, prohibición de exportar materiales de construcción, creación de la Gran Misión Venezuela Renace y un amplio programa de reconstrucción de infraestructura— puede parecer, a primera vista, un paquete convencional de recuperación económica. Sin embargo, vistos en conjunto, estos anuncios revelan una lógica política más profunda. No buscan sólo reconstruir ciudades sino reconstruir legitimidad.

Ese objetivo refleja el verdadero desafío que enfrenta Delcy Rodríguez después de la gran tragedia. La destrucción física puede medirse en número de viviendas colapsadas o kilómetros de carreteras. Mientras que la destrucción política se mide de otra manera: por la percepción pública de quién estuvo presente cuando la sociedad más lo necesitaba.

Durante los primeros días posteriores a los terremotos, numerosos testimonios describieron una respuesta efectuada inicialmente por vecinos, voluntarios, organizaciones civiles y equipos internacionales de rescate. Independientemente de la evaluación final sobre la actuación gubernamental, la percepción de la casi nula respuesta estatal durante las horas críticas alteró el equilibrio simbólico entre Estado y sociedad.

Ese cambio explica por qué el discurso de Delcy Rodríguez ha evolucionado rápidamente desde la administración de la emergencia hacia la narrativa de la reconstrucción nacional.

La nueva Gran Misión Venezuela Renace representa mucho más que un programa habitacional. Constituye un intento de reorganizar la relación entre Estado y ciudadanía mediante la distribución de recursos materiales.

Subsidios, créditos, reconstrucción de viviendas, rehabilitación de infraestructura y financiamiento bancario aparecen integrados dentro de una sola arquitectura política.

No es una innovación completamente nueva. A comienzos del siglo XXI, el chavismo utilizó programas sociales masivos como mecanismos simultáneos de asistencia y legitimación política. La diferencia es que, en aquel momento, esas políticas surgieron durante un período de expansión petrolera y capacidad distributiva del Estado. El contexto actual es radicalmente distinto.

La reconstrucción propuesta ocurre ahora bajo condiciones de restricciones fiscales, participación de organismos financieros internacionales, necesidad de cooperación externa y un entorno donde la capacidad administrativa del Estado ha sido puesta bajo escrutinio tanto nacional como internacional.

En ese contexto, la legitimidad deja de depender exclusivamente de la capacidad distributiva y comienza a depender de la credibilidad institucional. Esta diferencia resulta fundamental.

En las primeras décadas del chavismo, el Estado chavista buscaba ser el proveedor exclusivo de bienestar. Después del terremoto, el desafío consiste en convencer a la sociedad de que es capaz de coordinar eficazmente la reconstrucción. Por eso el paquete anunciado, Venezuela Renace, por la interina tiene una cantidad de medidas.

Los subsidios temporales buscan aliviar pérdidas inmediatas. Los créditos hipotecarios pretenden acelerar la recuperación del mercado inmobiliario. Las exoneraciones fiscales reducen costos de transacción. La prohibición de exportar materiales de construcción intenta garantizar disponibilidad doméstica. La alianza internacional para modernizar el aeropuerto internacional proyecta una imagen de apertura y cooperación.

Individualmente, cada medida responde a un problema concreto. Colectivamente, todas transmiten un mensaje político único: el Estado continúa siendo el actor indispensable para organizar el futuro. Asimismo, el énfasis en el crecimiento del sector hidrocarburos y en el aumento de la recaudación tributaria cumple una función similar.

Más que simples indicadores macroeconómicos, ambos datos buscan demostrar capacidad financiera suficiente para sostener la reconstrucción. En una economía marcada durante años por la destrucción del aparato productivo, la narrativa del régimen busca reemplazar la imagen de caos por una de recuperación progresiva.

Sin embargo, la verdadera batalla se desarrolla en un terreno menos visible.

Las sociedades no evalúan únicamente la cantidad de recursos destinados a una emergencia. También juzgan la secuencia temporal de las respuestas. Existe una diferencia política enorme

entre un Estado que previene, uno que responde inmediatamente y otro que reconstruye después de estar ausente durante la crisis inicial.

Esa diferencia condiciona la recepción pública de cualquier programa posterior propuesto por la estructura criminal que ocupa Miraflores.

La reconstrucción física puede lograrse mediante ingeniería, financiamiento y capacidad administrativa. La reconstrucción de la confianza, en cambio, exige algo mucho más difícil: demostrar coherencia entre las promesas, la ejecución y los resultados. Desde esa perspectiva, Venezuela Renace representa una apuesta política de alto riesgo para el gobierno interino. El desafío radica en que la misma estructura estatal ahora llamada a liderar la recuperación es percibida por amplios sectores de la sociedad como parte de las deficiencias que quedaron expuestas en el desastre de La Guaira. Esa percepción convierte cada anuncio no solo en una promesa de reconstrucción material, sino también en otra prueba de credibilidad institucional..

Si las obras avanzan, las viviendas se reconstruyen y la infraestructura comienza a funcionar nuevamente, la misión Gran Misión Venezuela Renace podría fortalecer la autoridad gubernamental. La reconstrucción se convertiría entonces en evidencia tangible de capacidad estatal. Pero si la ejecución resulta lenta, desigual o politizada, el efecto es contrario. Las mismas promesas que hoy buscan fortalecer legitimidad terminarán ampliando las dudas existentes sobre la eficacia institucional.

En política, las expectativas constituyen un activo extremadamente frágil. Cada anuncio incrementa el estándar con el que posteriormente será evaluado el gobierno.

Existe además un segundo desafío.

Las grandes catástrofes suelen modificar la relación psicológica entre ciudadanos y Estado. Cuando comunidades enteras descubren que su supervivencia inmediata dependió principalmente de redes familiares, organizaciones voluntarias y solidaridad espontánea, emerge una forma distinta de capital social. Esa experiencia puede fortalecer la resiliencia comunitaria, pero también reducir la dependencia simbólica respecto al aparato estatal.

Por esa razón, la competencia política posterior al terremoto no gira exclusivamente alrededor del presupuesto destinado a la reconstrucción. También gira alrededor del control del relato nacional.

¿Quién salvó vidas?

¿Quién organizó la ayuda?

¿Quién estuvo presente durante las primeras horas?

¿Quién hizo posible la recuperación?

Las respuestas a estas preguntas determinarán mucho más que el éxito administrativo del programa Venezuela Renace. Determinarán quién obtiene el crédito político por la reconstrucción del país. En última instancia, las grandes reconstrucciones nacionales nunca consisten únicamente en reconstruir ciudades.

Reconstruyen jerarquías.

Redistribuyen legitimidades.

Reordenan la relación entre gobernantes y gobernados.

El verdadero desafío para quienes hoy ejercen el poder desde Miraflores no consiste únicamente en reconstruir carreteras, hospitales o viviendas devastadas por el terremoto. Consiste en demostrar que aún conservan la capacidad política para liderar la reconstrucción nacional. La infraestructura puede levantarse nuevamente con recursos, ingeniería y tiempo; la legitimidad, en cambio, depende de la confianza acumulada entre gobernantes y gobernados. Y esa confianza es mucho más difícil de recuperar cuando una parte significativa de la sociedad concluye que la transición política debió preceder, y no seguir, a la reconstrucción material del país.